

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, siete (07) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

DEMANDANTE	: ALPIDIO DE JESUS GONZALEZ
DEMANDADO :	: COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO LABORAL
RADICADO NACIONAL	: 05-088-31-05-001-2017-0078-01
RADICADO INTERNO	: 229-21
DECISIÓN	: CONFIRMA Y REVOCA SENTENCIA
ACTA NÚMERO	: 272

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el grado de consulta en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con el **Decreto 806 de 2020**: “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, artículo 15, la sentencia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicita se CONDENE a Colpensiones al reconocimiento y pago de los incrementos pensionales por cónyuge a cargo en un 14%, y del 07% por hijo menor a cargo; al pago de la indexación de las condenas; y las costas del proceso.

Como fundamento fáctico de lo anterior manifestó que es pensionado por vejez por parte de Colpensiones desde el 30 de agosto de 2011 según Resolución GNR 225943 del 18 de junio de 2014, y que al adquirir la pensión ya convivía con la señora GLADYS MORENO que es su compañera permanente desde hace 19 años. Que esta depende económicamente de el

ya que no tiene empleo, pensión o renta alguna. Que el 09 de marzo de 2015 solicitó ante Colpensiones el reconocimiento y pago del incremento pensional y el 09 de marzo la entidad dio respuesta de forma negativa. Que además es el padre del menor MIGUEL ANGEL GONZALEZ AGUDELO, nacido el 29 de febrero de 2008 quien depende económicamente de él. Que además el 10 de septiembre de 2015 solicito el incremento por hijo el cual también le fue negado por la entidad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

Mediante sentencia del 30 de julio de 2021, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bello, ABSOLVIÓ a Colpensiones de todas las pretensiones incoadas en su contra por la Sr. ALPIDIO DE JESÚS GONZÁLEZ. CONDENÓ en costas a la parte demandante fijando como agencias en derecho la suma de \$100.000.

El proceso llega a esta corporación en el grado jurisdiccional de consulta.

ALEGATOS DE CONCLUSION.

Las partes no presentan alegatos de conclusión.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Se centra el problema jurídico en esta instancia a determinar si hay lugar al reconocimiento y pago de los incrementos pensionales por personas a cargo consagrados en el Decreto 758 de 1990, a la indexación, y a las costas procesales.

Por lo anterior el problema jurídico se resolverá en el siguiente orden:

De los incrementos pensionales por cónyuge a cargo

Está probado en el proceso que al demandante le fue reconocida la pensión de vejez por Colpensiones a través de la Resolución GNR 225943 del 18 de junio de 2014, a partir del 30 de agosto de 2011 en cuantía de \$784.060, (fls 18 y ss).

Los incrementos pensionales de que habla el Art 21 del Decreto 758 del 1990, no era un tema que las cortes trataran en el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia, ha sentado jurisprudencia en sentencia con radicado 21.517 del 27/julio/ 2005, donde dijo que estos perduraban aun después de la entrada en vigencia de la Ley 100

“Es verdad que los incrementos de las pensiones no están involucrados en la ley 100, pero ello no significa que pierdan su vigencia; por el contrario, si tal normatividad no los reguló, no quiere decir que los hubiera derogado, entonces en ese orden conservan su pleno vigor.”

Igualmente, las del 1º de agosto de 2010, rad. 36345, en la que a la vez remite a sentencias anteriores de diciembre 5 de 2007 radicado 29741 y julio 27 de 2005 radicado 21517.

Pese a lo anterior en la sentencia T-456 de 2018 la Corte cambia su posición frente a los referidos incrementos y expresa que con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 los mismos si quedan derogados y que solo se tendrá en cuenta el régimen de transición de que trata el Art. 36 de la Ley 100, en temas relacionados con la adquisición de la pensión lo relativo a la edad, semanas cotizadas y monto. Y Finalmente en el año 2019 la Corte Constitucional en la **sentencia SU-140** reiteró que los incrementos pensionales establecidos en el art. 21 del Decreto 758 de 1990, fueron derogados y perdieron su vigencia con la entrada en vigencia de la Ley 100, esto es que **los que adquirieron su derecho a pensionarse después del 1º de abril de 1994 no tienen derecho a incrementos pensionales aun estando en régimen de transición**, salvo de los que ya hubieran adquirido el derecho a pensionarse antes de la mencionada fecha. Y también expresó la Corte que dichos incrementos son contrarios al Acto Legislativo 01 del 2005, manifestando lo siguiente.

*“Cierta/, ante la regulación integral y exhaustiva en materia pensional que hizo la Ley 100, no cabe sino concluir sobre la **derogatoria orgánica** del régimen anterior, dentro del cual cohabitaban los referidos incrementos (...)*

... si cupiere duda sobre la derogatoria orgánica que, por virtud de la expedición de la Ley 100, sufrieron los incrementos que en su momento previó el artículo 21 del Decreto 758 de 1990, tal derogatoria se encontraría confirmada con la consagración de un régimen de transición que se diseñó para proteger las expectativas legítimas exclusivamente respecto del derecho a la pensión, pero que no llegó a extenderse a derechos extra pensionales accesorios de dicha pensión, más aún cuando –como sucede con los incrementos que prevé el artículo 21 del Decreto 758 de 1990 no fueron dotados

de una naturaleza pensional por expresa disposición del subsiguiente artículo 22 ibíd (...)

No obstante, si aún a pesar de todo lo atrás expuesto, todavía se estimara que el artículo 21 del Decreto 758 de 1990 no hubiera sido objeto de derogatoria alguna, sería entonces menester inaplicarlo por inconstitucional en casos concretos pues su eventual reconocimiento violaría el inciso 11 del artículo 48 superior, según la reforma introducida por el Acto Legislativo 01 de 2005.”

En consecuencia, y acogiendo el criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional considera que no hay lugar al reconocimiento de los incrementos pensionales por personas a cargo por tratarse de una pensión reconocida con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, aun cuando hubiera sido reconocida con régimen de transición, por lo que la sentencia de primera instancia será CONFIRMADA íntegramente, pero por las razones antes enunciadas.

Ahora, con respecto a la obligatoriedad de las sentencias de unificación de la Corte Constitucional como lo es para el caso la sentencia SU 140 de 2019, vale la pena recordar lo indicado por esta misma corporación en sentencia SU 611 de 2017 en la que se indicó que:

*“8.14. En este escenario, es permitente destacar que la vinculatoriedad del precedente tiene especial relevancia en el caso de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues sus efectos desbordan la especialización que caracteriza a la administración de justicia y que determina que en cada una de las jurisdicciones los funcionarios judiciales tengan como referencia, principalmente, al respectivo órgano de cierre. **En efecto, la jurisprudencia constitucional tiene incidencia directa y general en la jurisdicción en la medida que, por mandato del artículo 241 Superior, a esta Corporación “se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución (...).”***

*8.15. Bajo este orden de ideas, el sometimiento general a la Carta Política de todos los órganos de la jurisdicción, incluyendo los órganos de cierre de las distintas jurisdicciones, y las autoridades administrativas determina que el precedente constitucional tenga una manifestación especial y amplificada de la vinculatoriedad que se ha atribuido de manera general al precedente de las altas cortes. Ello se materializa, particularmente, según los efectos que se prediquen de los fallos que profiere el máximo tribunal de la jurisdicción constitucional, es decir, según se trate de sentencias en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, o de sentencias de tutela proferidas por las salas de revisión **o por la Sala Plena en sede de unificación.***

(...)

8.20. Por su parte, en lo que concierne a los fallos de esta Corporación al realizar el control concreto mediante sentencias de tutela, estos tienen, en principio, efectos inter partes, tal como se dispone en el numeral segundo del artículo 48 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia—¹ y el artículo 36 del Decreto 2191 de 1991. Sin embargo, esta

¹ “(...) 2. Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio únicamente para las partes. Su motivación sólo constituye criterio auxiliar para la

Corporación al examinar la constitucionalidad del mencionado artículo 48 reconoció efectos a la doctrina constitucional que fija el contenido y alcance de los derechos constitucionales, como una armonización entre el principio de independencia judicial y el de igualdad, al considerar lo siguiente:

“La doctrina constitucional que define el contenido y alcance de los derechos constitucionales, sentada por la Corte Constitucional, con ocasión de la revisión de los fallos de tutela, trasciende las situaciones concretas que le sirven de base y se convierte en pauta que unifica y orienta la interpretación de la Constitución. El principio de independencia judicial, tiene que armonizarse con el principio de igualdad en la aplicación del derecho, pues, de lo contrario, se corre el riesgo de incurrir en arbitrariedad. La jurisprudencia de los altos órganos jurisdiccionales, por medio de la unificación doctrinal, persigue la realización del principio de igualdad”².

8.21. Lo anterior llevó a que en el fallo citado se decidiera que resultaba exequible el efecto inter partes de las sentencias de tutela proferidas por esta Corporación, bajo el entendido que **“las sentencias de revisión de la Corte Constitucional, en las que se precise el contenido y alcance de los derechos constitucionales, sirven como criterio auxiliar de la actividad de los jueces, pero si éstos deciden apartarse de la línea jurisprudencial trazada en ellas, deberán justificar de manera suficiente y adecuada el motivo que les lleva a hacerlo, so pena de infringir el principio de igualdad”**. (Resaltado fuera del texto original).

8.22. En este contexto, las sentencias de revisión que definen el contenido y alcance de los derechos constitucionales vinculan a todos los funcionarios judiciales a la hora de proferir cualquier fallo en su especialidad, de modo que se aplique el ordenamiento a la luz de la interpretación que la Corte haya definido de los derechos superiores que tengan incidencia en el caso objeto de estudio.

(...)

8.24. Ahora bien, no puede pasarse por alto que la vinculatoriedad de las sentencias proferidas en ejercicio del control concreto está subordinada a que se identifique el precedente en vigor, pues, como es propio de la naturaleza misma de la función judicial y en desarrollo del principio de autonomía, también al nivel de las altas cortes, es plausible que en una corporación se adopten distintas decisiones para supuestos fácticos y jurídicos similares, como puede suceder entre las distintas salas de revisión de la Corte Constitucional. En consecuencia, la vinculación de las autoridades judiciales y administrativas pasa por el hecho que, previamente, se identifique el precedente en vigor aplicable y que, como lo ha sostenido esta Corporación, **“corresponde al precedente constitucional fijado reiteradamente por la Corte, que en diversas decisiones trata problemas jurídicos análogos con presupuestos fácticos idénticos, frente a los cuales adopta de manera uniforme la misma regla de decisión”³. Asimismo, el precedente puede ser definido a través de la actividad de unificación que realiza la Sala Plena y que, a diferencia de una sentencia de tutela aislada dictada por una sala de revisión, basta con una sentencia unificadora para que exista un precedente en vigor**⁴. (resalta de la sala)

actividad de los jueces”.

² Sentencia C-037 de 1996.

³ Entre otras, ver el Auto 300 de 2006 y el Autor 131 de 2004.

⁴ Así lo explicó esta Corporación en la Sentencia SU-30 de 2015, al comparar las sentencias de unificación de la Corte Constitucional con los fallos de constitucionalidad, en el siguiente sentido: *“En este punto es importante aclarar que en el caso de las sentencias de unificación de tutela (SU) y de control abstracto de constitucionalidad proferidas por la Corte Constitucional, basta una sentencia para que exista un precedente, debido a que las primeras unifican el alcance e interpretación de un derecho fundamental para casos que tengan un marco fáctico similar y compartan problemas jurídicos, y las segundas, determinan la coherencia de una norma con la Constitución Política”*.

Partiendo de la jurisprudencia transcrita se evidencia que la sentencia SU 140 de 2019 acogida por esta Sala, es plenamente aplicable y en razón de la cual se recoge por la Sala la postura anterior que se tenía con respecto a la vigencia de los incrementos pensionales por personas a cargo como se advirtió, debiendo negarse dicha pretensión al evidenciar que los mismos no se encuentran vigentes después de la expedición de la Ley 100 de 1993.

Como la decisión adoptada obedece a un cambio jurisprudencial considera la Sala que deben revocarse las costas impuestas en primera instancia a la parte demandante.

Sin costas en esta instancia, por conocerse en consulta.

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bello en cuanto a la condena en costas impuestas a la parte demandante, para en su lugar ABSOLVER de las mismas.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bello, por las razones argumentadas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Sin constas en esta instancia.

TERCERO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la sentencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.


Los Magistrados,


HUGO ALEXANDER BEDOYA DIAZ

Radicado Único Nacional 05-088-31-05-001-2017-00078-01
Radicado Interno 229-21



GUILLERMO CARDONA MARTINEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

Radicado Único Nacional 05-088-31-05-001-2017-00078-01
Radicado Interno 229-21



SECRETARÍA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE	: ALPIDIO DE JESUS GONZALEZ
DEMANDADO :	: COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO LABORAL
RADICADO NACIONAL	: 05-088-31-05-001-2017-0078-01
RADICADO INTERNO	: 229-21
DECISIÓN	: CONFIRMA Y REVOCA SENTENCIA

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DIAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/126> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 08 de octubre de 2021 a las
8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 08 de octubre de 2021 a la 5:00pm

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS

SECRETARIO